

Aunque aseguran no creérsela

La «Operación Boyer» preocupa en el PSOE

La llamada «Operación Boyer» (nuevo partido y candidatura a la Presidencia del Gobierno) preocupa en el PSOE, aunque sus dirigentes afirman que lo consideran una «mera fabulación», que nadie se cree.



Miguel Boyer. LA VERDAD

Uno de cada tres jóvenes se librará de la «mili»

De los 238.940 jóvenes que serán sorteados el 16 de noviembre, unos 80.000, la cuarta parte, se librará de la mili en 1986. Los excedentes aumentan este año un 10 por 100 respecto al pasado.

edición General

Viernes
24 octubre 1986

La Verdad

Según el presidente de la CEOE, tras su entrevista con Felipe González

El Gobierno se acerca más a la Patronal

Ya sólo discrepan en la urgencia de las medidas y en su concreción

CARMEN PARRA, MADRID

La conversación de dos horas que mantuvieron ayer a solas Felipe González y José María Cuevas fue muy productiva para las demandas que tienen planteadas los empresarios desde hace tiempo. El presidente de CEOE, con prudencia, afirmó ante los periodistas que «cada vez existen más coincidencias entre la patronal y el Gobierno» en temas como Seguridad Social, reforma fiscal, concepto general de flexibilidad y grandes políticas de comercio interior y exterior.

No sabemos si el señor González se siente también cada vez más cerca de Cuevas porque no salió de Palacio a informar del contenido de la entrevista. De momento nos quedamos sin saber: las auténticas intenciones flexibilizadoras del Ejecutivo, más allá de su coincidencia en la filosofía global. Los últimos mensajes de Solchaga, con una ambigüedad calculada, han creado un ambiente de expectación y preocupación en el ámbito sindical.

Entre el Gobierno y CEOE, las únicas discrepancias que aún se mantienen se refieren a la urgencia y concreción de las medidas, según la versión del dirigente

empresarial, quien se siente satisfecho de que cada vez más personas que influyen en la opinión pública hagan los mismos análisis que él. «Empezaba a sentirme un personaje raro —dijo Cuevas—. Afortunadamente para mi equilibrio me dan la razón».

En opinión de Cuevas ya sólo quedan reticencias en el lado sindical por parte de aquellos que «detentan mandarinatos sindicales» y que son, a su juicio, quienes están retrasando una política liberalizadora y acompañada a la de los países del Mercado Común, aunque percibe que hay personas con más poder que atenderán sus demandas.

El presidente de la CEOE, sin testigos, reiteró ante el presidente del Gobierno los cuatro temas que para los empresarios nos separan de Europa e impiden que nuestras empresas estén al mismo nivel de competitividad: los precios de los combustibles industriales, cotizaciones a la Seguridad Social, directiva comunitaria sobre despidos colectivos y el precio del dinero.

Tal como era de esperar no quiso desvelar las medidas que hoy aprobará el Consejo de Ministros pero sí afirmó que el señor González coincide en que reducir el coste de los combustibles para usos industriales —fuel-oil y gas natural, por ejemplo— mejora la competitividad y no descarta un rápido ajuste que se negó a precisar si se producirá hoy mismo.

La liberalización del mercado de capitales, ya anunciada por Solchaga en la asamblea de APD, se abordará a través de una profunda modificación del mercado de valores, tratamiento



fiscal de los incentivos a la inversión, liberalización de los tipos de interés del pasivo de las entidades bancarias y acelerar el desarme de coeficientes que atenazan la actividad bancaria.

Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, Cuevas transmitió al presidente González el siguiente mensaje: si no se produce más déficit antes de enero se puede reducir el peso de las cuotas de empresarios y sindicatos. El ministro de Trabajo había anunciado una reforma amplia que entre en vigor en 1988, pero la patronal quiere que tenga los primeros efectos ya en 1987. Las negociaciones están previstas para noviembre y

diciembre. La directiva comunitaria sobre despidos la engloba la patronal dentro de un marco más amplio, la flexibilidad del mercado de trabajo, que requiere tratar aspectos como movilidad funcional y geográfica, la vía de fraude que hay en el seguro de desempleo, o la formación profesional. González también comparte a un matiz importante. Para el Gobierno debe ser un acuerdo de los interlocutores sociales, mientras que para el dirigente empresarial si no se resuelve por consenso, procede una decisión del ejecutivo.

En cuanto a salarios, los empresarios intentarán que suban en torno a la previsión de inflación —5 por 100—, pero ayer Cuevas volvió a reiterar una idea lanzada este verano: Nuestros salarios tienen menor poder adquisitivo que los de la CEE mientras que los costes totales son más caros. Cuevas cree que esa es la gran paradoja que hay que resolver porque el riesgo es una pérdida mayor de empleo.

González asimismo recibió una queja de la patronal sobre el plan de fomento a la exportación se ha quedado en declaración de intenciones y oyó discrepancias con las medidas antiinflacionistas que se barajan —«es verdad, afirma Cuevas, que se han disparado los pollos y los tomates, pero no es racional echar la culpa sólo a ellos». El dirigente empresarial considera importante que se empiece a reflexionar sobre los efectos en la inflación de las propias decisiones del sector público. Citó como ejemplo los presupuestos de 1987 que crecen un 10 por 100; la Seguridad Social, un 12; las cuotas, el 11; impuestos directos, el 11 por 100; y los impuestos indirectos, el 22 por 100.

Tras las declaraciones del ministro Solchaga

UGT y CC.OO. exigen explicaciones

REDACCION, MADRID

El secretario general de UGT, Nicolás Redondo, ha pedido al Gobierno que aclare las medidas liberalizadoras anunciadas por el ministro Carlos Solchaga. Redondo calificó de «ambigua» la política económica y pidió que los miembros del Gabinete «expliquen lo que entienden por flexibilizar».

El líder sindical anunció «graves convulsiones sociales en nuestro país» si el Gabinete entiende por flexibilización la puesta en práctica de una economía similar a la que en la actualidad llevan a cabo los gobiernos presididos por Margaret Thatcher en Gran Bretaña o Jacques Chirac en Francia. Calificó de «falacia y contrabando ideológico» el «frenesí neoliberal que domina en la actualidad la política económica española», que, en su opinión, desembocaría en una situación de confusión «y en una vuelta al siglo XIX».

Mientras tanto Marcelino Camacho de-

claraba que con «sus manifestaciones de flexibilidad y liberalización del mercado de trabajo, el ministro de Economía, ha declarado la guerra a los trabajadores de este país».

El dirigente de Comisiones resaltó: «Queremos decir al ministro que se equivoca, y que CC.OO va a emplazar a UGT para, desde la perspectiva de la unidad, afrontar la defensa de los trabajadores y que se plantee fehacientemente que aquí hay unas víctimas y unos beneficiarios del régimen político que se ha instalado».

Miguel Ángel Ordoñez asegura que «a UGT no le va a temblar el pulso en la defensa de los intereses de los trabajadores», mientras que Apolinar Rodríguez asegura que el Ministro de Economía y Hacienda «manipuló» los datos sobre economía sumergida presentados la pasada semana en el Congreso. En su opinión la intervención de Solchaga presenta un «problema deontológico grave», ya que en la Encuesta sobre las Condiciones de Vida

y Trabajo en España (ECT) se contabiliza como población en paro el 18,2 por ciento. Por el contrario, Solchaga señaló que la tasa se situaba en el 15,9, al incluir como población activa a los marginales que se autocalificaban como parados.

El responsable de acción sindical de UGT que «hay una falsedad con el objeto de justificar las declaraciones de Solchaga de este verano cuando afirmó que el paro sólo afectaba al 15 por 100 de la población activa». En un informe de este sindicato se indica que «es lamentable contemplar como un juego «nominalista» permite a la Administración hacer desaparecer 332.000 parados y rebajar la tasa de paro, del 18,2 por ciento que la ECT aporta a un 15,9 más aceptable por las autoridades económicas». Apolinar Rodríguez se lamenta de que Solchaga no haya pedido responsabilidades a los empresarios sobre la economía sumergida «dadas las ventajas de costos que para los empresarios supone».